

Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

**Vistos y teniendo presente:**

1º) Que, en estos autos rol N°2754-2019 comparece don PABLO PAREDES BRAVO, abogado, en representación de la demandada, la MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A, quien deduce recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada con fecha 10 de septiembre de 2019 por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que desestimó las excepciones opuestas y declaró que el actor fue objeto de un despido vulneratorio por discriminación, recurso que deduce para ante esta Corte, a fin de que, conociendo del mismo, dicho Tribunal la invalide, dictando otra en su reemplazo que declare que se rechaza la demanda en todas sus partes, en la forma y términos que solicita, por las causales que interpone en forma subsidiaria.

2º) Que la primera causal de nulidad que deduce es la del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada por juez incompetente.

En cuanto a la forma como se configura dicha causal, el recurrente explica que el 24 de octubre de 2018 don Carlos Frías López, a pesar de reconocer no haber celebrado un contrato de trabajo con su representada y de encontrarse regido por el Estatuto Administrativo, en su calidad de funcionario de planta, dedujo una denuncia por supuesto despido vulneratorio de derechos fundamentales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 485 y 489 del Código del Trabajo.

Agrega que opuso la excepción de incompetencia del Tribunal, fundada en los argumentos que siguen.

El Código del Trabajo no es el estatuto aplicable al demandante, al estar excluido expresamente de su aplicación por el propio Código en su artículo 1º, en relación con los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley N°18.883.

El artículo 1º del Código del Trabajo establece en su inciso segundo y tercero que: "...Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes,



participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

Añade que los funcionarios públicos que se desempeñan en Municipalidades se rigen por la Ley 18.883, que fija el Estatuto para Funcionarios Municipales, cuerpo legal que sujeta a su normativa a dichos funcionarios. Su artículo 2° regula la contratación de personal de planta y a contrata: “Artículo 2°.- Los cargos de planta son aquéllos que conforman la organización estable de la municipalidad y sólo podrán corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la ley N°18.695. Respecto de las demás actividades, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el sector privado.”

Luego, el artículo 7° de la misma ley establece el cargo del Sr. Frías, como parte de la planta.

La misma ley N°18.883 posibilita que sólo algunas actividades se presten por el sector privado, y por ende, se regulen por el Código del Trabajo, por lo cual la supletoriedad actúa sólo en esos casos específicos señalados por el legislador.

El artículo 3° de la Ley N°18.883 contempla ciertas posibilidades específicas para que las municipalidades puedan contratar personal bajo la modalidad del Código del Trabajo. Dicha norma dispone: “Quedarán sujetos a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación.” El inciso segundo dispone que “el personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se regirá también por las normas del Código del Trabajo.” Esto está en concordancia con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, referidos al principio de legalidad, que expresa que los órganos estatales no tienen más atribuciones que las conferidas expresamente por las



leyes, y el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, impide a los municipios contratar personal sujeto al Código del Trabajo fuera de los casos específicamente señalados por la ley, como ocurre en las situaciones a que alude el artículo 3° del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, Ley N°18.883.

3°) Que el recurrente afirma que es posible advertir de lo señalado por el propio demandante en su libelo, que ninguna de esas actividades eran desempeñadas por el actor, en razón de lo cual se encontraba excluido de la aplicación del Código del Trabajo. De acuerdo a lo expresado por el Sr. Frías en su libelo, desempeñaba la función de DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, calidad de directivo grado 3° de la planta profesional y, como tal, las normas del Código del Trabajo no le eran aplicables.

Por lo tanto, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago no era competente para conocer del asunto, puesto que el Sr. Frías tenía la calidad de Funcionario Público, de la Planta Profesional de la Municipalidad con el Cargo de Directivo.

Se encontraba regido por un estatuto especial por disposición legal expresa, la Ley N°18.883 denominada Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y no por el Código del Trabajo. Para que no quede ninguna duda de la incompetencia del Tribunal, por no ser aplicable el Código del Trabajo, el mismo estatuto de Funcionarios Municipales, al fijar la derogación tácita del antiguo estatuto, indica en el artículo 159 que "Toda referencia que las leyes vigentes efectúen al decreto con fuerza de ley N°338, de 1960, en relación con los funcionarios municipales, se entenderá hecha a las disposiciones correspondientes de este Estatuto".

4°) Que el recurrente agrega que el artículo 156 de la Ley N°18.883 establece expresamente la competencia de la Contraloría General de la República, mediante un procedimiento completo y específico, para la reclamación de un acto contrario a los derechos que les confiere el Estatuto de Funcionarios Municipales.

El control de un acto administrativo, como un decreto alcaldicio, debe ser revisado por la Contraloría General, de acuerdo al mandato del



legislador establecido en el artículo 156 de la Ley N°18.883, que tiene por finalidad velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico relativo a los actos y a la actividad de la administración municipal. Además, está atenta al respeto del principio de la probidad administrativa y el resguardo del patrimonio de las entidades edilicias.

Para esto, emite dictámenes -a solicitud de los municipios, de sus funcionarios y de los demás órganos de la Administración del Estado, o bien como consecuencia de reclamos de particulares- sobre la correcta interpretación y aplicación de normas de distinto rango que regulan orgánicamente la actividad municipal, como asimismo, de los distintos textos estatutarios que regulan la relación laboral del personal de ese sector, para lo cual lleva un registro computacional actualizado de los funcionarios municipales y de las personas contratadas a honorarios por tales entidades.

El artículo citado dispone: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto.” Para dicho efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieron conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos, el plazo para reclamar será de sesenta días.

“La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo, previo informe del alcalde respectivo. El informe deberá ser emitido dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud que le formule la Contraloría. Vencido este plazo, con o sin el informe, la Contraloría procederá a resolver el reclamo, para lo cual dispondrá de veinte días hábiles.”

A mayor abundamiento, dice, el estatuto regula que los derechos de los funcionarios consagrados en el mismo, prescribirán en el plazo de dos años contado desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles.

De acuerdo con el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales: “Es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos” y en general ejercer otras funciones que las determinadas



en la ley.

5º) Que, a continuación, el recurrente argumenta que el Juzgado de Letras del Trabajo no es competente, pues no es el llamado por la ley a conocer de la invalidación de actos administrativos, citando al Tribunal Constitucional, el fallo de los autos ROL 3853-17-INA, del que reproduce varios motivos, afirmando luego que en atención a las consideraciones expresadas, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago era absolutamente incompetente para pronunciarse sobre la denuncia interpuesta por el demandante en Procedimiento de Tutela Laboral establecido en los artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, y por tanto, para dictar la sentencia que recurre.

Sin embargo, dice, sin perjuicio de los argumentos planteados, la sentencia resolvió rechazar la excepción de incompetencia absoluta opuesta por su representada.

6º) Que el recurrente, frente a lo indicado por la sentencia recurrida, insiste en los argumentos planteados a propósito de la excepción de incompetencia absoluta opuesta en autos, más aun cuando aquellos han sido reiterados y ratificados por el Tribunal Constitucional, en sentencia de fecha 20 de Junio de 2019, dictada en los autos Rol 5971-2019-INA, de la que transcribe lo pertinente.

Añade que ello ratifica la inaplicabilidad del Procedimiento de Tutela Laboral, establecido en los artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, respecto de los funcionarios públicos que se encuentran regidos por estatutos especiales, y en consecuencia la incompetencia absoluta del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, para conocer de los presentes autos.

7º) Que, respecto del modo como la infracción influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el recurrente señala que de haber el Tribunal interpretado y determinado correctamente el sentido y alcance de los artículos 1º, 420 y 485 y siguientes del Código del Trabajo, en relación con los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, habría concluido, tal como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que el procedimiento de Tutela Laboral no era aplicable al demandante, en razón de su calidad de funcionario público regido por un



estatuto especial, y habría declarado su incompetencia para conocer de estos autos, acogiendo la excepción de incompetencia absoluta opuesta por su parte, rechazando la demanda en todas sus partes, con expresa condenación al pago de las costas.

8º) Que, en subsidio, deduce la segunda causal de nulidad, fundada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, acusando que la sentencia ha sido dictada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

En cuanto a la configuración de la causal, expresa que se relaciona con los errores o infracciones en que ha incurrido el sentenciador al valorar o apreciar la prueba rendida en autos, siendo la valoración o apreciación de la prueba “la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o el valor de convicción que puede deducirse de su contenido.” Las reglas de la sana crítica se encuentran constituidas por las leyes de la lógica, las científicas, las técnicas y aquellas que deriven de la experiencia.

Explica lo que se ha entendido por reglas de la lógica, y que se encontraría constituida por las leyes de la coherencia y la derivación.

En cuanto al principio de la derivación, se ha entendido como la razón suficiente que debe existir tras todo razonamiento, es decir, que cada pensamiento debe provenir de otro con el cual está relacionado, y del cual se deriva lógicamente.

Agrega que como es posible determinar del petitorio del libelo pretensor, en autos el actor alega que con ocasión de su "despido" habría sido discriminado, por razones de salud, siendo aquella la única vulneración de derechos alegada.

En tal contexto y tal como expuso en su escrito de contestación de demanda, correspondía al actor acreditar que había sido objeto de una discriminación arbitraria, debiendo probar en primer término que se encontraba en idéntica posición jurídica que los demás trabajadores, respecto de los cuales, a su entender, había sido discriminado o tratado de forma diversa.

El actor señala que existían en la Municipalidad otros trabajadores que habrían hecho uso de licencias médicas por más de 180 días, a los que



no se había aplicado la facultad otorgada por el artículo 148 del Estatuto Administrativo, mientras que en el caso del actor se había aplicado.

Así, correspondía al demandante acreditar que su situación era igual, equiparable o asimilable a la de los otros trabajadores a los que hace referencia, sin embargo, ello no ocurrió, el actor no acreditó el hecho de haberse encontrado en idéntica situación jurídica que otros trabajadores, y haber recibido un trato diferente a aquellos.

Su representada negó que el demandante se haya encontrado en idéntica situación jurídica que otros funcionarios de la Municipalidad, fundando aquella circunstancia particularmente en el cargo que el mismo ostentaba, esto es, Director de Obras.

9º) Que el recurrente aduce que sin perjuicio de lo anterior, y no habiéndose tenido por acreditada la circunstancia de encontrarse el actor en idéntica situación jurídica que otros funcionarios, la sentencia, en el considerando duodécimo de la sentencia, resuelve del modo que transcribe, invirtiendo la carga de la prueba, obligando a su representada a acreditar un hecho que no era resorte de su parte acreditar, a saber, la idéntica situación jurídica del actor respecto de otros funcionarios de la Municipalidad.

Explica que la normativa legal permite al juez del fondo en el procedimiento de tutela, la alteración de la carga de la prueba, en la medida que se acrediten indicios suficientes de haberse producido la vulneración de derechos alegada, debiendo así el demandado acreditar los fundamentos y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

En autos, atendido que lo alegado es la existencia de una discriminación arbitraria, correspondía al demandante acreditar a lo menos indicios suficientes de haber sido objeto de dicha discriminación, para lo cual debía acreditar en primer término haberse encontrado en una misma posición jurídica que otros trabajadores, para así, solo una vez que el demandante hubiese acreditado aquello, alterar la carga de la prueba y exigir a su representada la acreditación de los fundamentos y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

Sin embargo, como se advierte en el considerando duodécimo, la



sentencia invierte la carga probatoria, con base únicamente en los dichos del actor, y exige a su representada acreditar por qué otros trabajadores no se habrían encontrado en la misma posición jurídica del actor, es decir, se exige a su representada que acredite los indicios señalados por el demandante.

Aduce que el considerando duodécimo señala que su representada no habría arbitrado los medios necesarios para determinar que el actor y otros funcionarios de la Municipalidad se encontraban en situaciones jurídicas diversas al actor, pormenorizando que su parte no habría contado con los oficios requeridos por la misma en la Audiencia de Juicio, situación falsa, bastando revisar el Acta de Audiencia de Juicio de 24 de junio de 2019, en la que se incorporaron los oficios requeridos por su parte.

10º) Que el recurrente agrega que el testigo Ludwig Bornand Manaka precisó en estrados que el demandante y los otros funcionarios señalados por el actor, no se habrían encontrado en idéntica posición jurídica, toda vez que el actor ostentaba un cargo Directivo y no de un funcionario genérico, señalando además que era de su conocimiento que la prerrogativa establecida en el artículo 148 del Estatuto Administrativo había sido aplicada a otro funcionario con anterioridad.

Para finalizar, la sentencia no señala cuáles serían los otros trabajadores que se habrían encontrado en idéntica posición jurídica que el demandante, así como tampoco indica por qué se estimaría dicha circunstancia.

Atendidas las pruebas rendidas en autos, conforme lo señalado, no existen elementos de prueba que permitan sostener que el demandante se encontraba en idéntica posición jurídica que otros funcionarios de su representada, elemento básico y esencial para determinar la existencia de la pretendida discriminación, es decir, la conclusión de la sentencia no deriva ni encuentra motivación suficiente en la prueba rendida, sino que deviene únicamente de los dichos del demandante.

11º) Que, respecto del modo como la infracción influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el recurrente sostiene que ello ocurrió porque la sentencia llegó a una conclusión que no guarda relación





ni encuentra fundamento en la prueba rendida en autos, más aun si se considera que la sentencia exige a su representada acreditar una circunstancia que fuera alegada por el demandante, que aquel se encontraba en idéntica posición jurídica que otros funcionarios de su representada, hecho que resulta esencial para la determinación de la existencia de la pretendida discriminación.

Si la sentencia hubiese guardado apego a los hechos acreditados, habría determinado que el demandante no probó uno de los supuestos de la discriminación que alega, esto es, que compartía idéntica posición jurídica respecto de otros funcionarios, y que sin embargo recibió un trato desigual, en razón de lo cual habría determinado la inexistencia de la discriminación alegada por el actor, rechazando la demanda de autos en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

12º) Que, por último, el recurrente pide tener por interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada el 10 de septiembre de 2019, por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, declarar su admisibilidad y remitir los antecedentes a esta Corte, a fin de que dicho Tribunal, conociendo del recurso, lo acoja, declarando:

1. Que se acoge el recurso de nulidad, por la causal del artículo 478, letra a) del Código del Trabajo, ya que la sentencia que se recurre ha sido dictada por un juez incompetente, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, declarando la nulidad de la sentencia recurrida, dictando la correspondiente de reemplazo que acoja la excepción de incompetencia opuesta por su parte, y se declare que el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago es incompetente para conocer de estos autos, con costas.

2. En subsidio, se acoja la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en atención a que la sentencia ha sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, en particular, el principio de derivación o razón suficiente, en virtud de haber arribado a conclusiones que no encuentran asidero en las probanzas rendidas en autos, anulando la sentencia recurrida y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo en



que declare que se rechaza la demanda de autos en todas sus partes, con costas.

13º) Que, para el análisis del asunto planteado, es pertinente recordar que el artículo 474 del Código del Trabajo dispone que “Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.”

El artículo 477 del mismo texto legal agrega que “Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

“El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda.”

El artículo 478 del Código de que se trata añade que “El recurso de nulidad procederá, además: a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;”

“...b) Cuando –la sentencia- haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica;”

Igualmente, interesa transcribir el inciso final del artículo 478 del Código del ramo, el que prescribe que “Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.”

Y el inciso final del artículo 480, según el cual “Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo inadmisibile si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado oportunamente.”



Como se ha explicado reiteradamente, si bien es cierto el precepto citado en el párrafo anterior dispone que el examen de admisibilidad se hace una vez ingresado el recurso ante esta Corte, tal circunstancia no impide que la sala que conozca del fondo haga a su turno un examen del mismo tipo, dada la trascendencia que tienen todos los requisitos que se han señalado, y en el caso específico de las peticiones, ellas son de tal magnitud que, si están mal formuladas o simplemente se han omitido por el recurrente, provocan el efecto de que resulta imposible el acogimiento del libelo recursivo, pues no se otorga competencia al tribunal ad quem para que dicte fallo resolviendo del modo como interesa al recurrente.

14º) Que, en cuanto al primer motivo de anulación, el recurrente sostiene la incompetencia absoluta del tribunal para conocer de la materia debatida en autos. La planteó como excepción y el tribunal la resolvió en el fallo que se revisa.

Lo cierto es que esta Corte ya ha tenido ocasión de conocer de semejante alegación, habiéndose resuelto, en forma reiterada, que los Juzgados del Trabajo sí poseen competencia para conocer de la demandas de tutela de derechos, ejercidas por funcionarios de la Administración del Estado, básicamente por inexistencia de una acción propia, en los estatutos, diversos, que reglan la relación del Estado con sus funcionarios.

Esta postura tiene su fundamento en el propio artículo 1º del Código Laboral, del siguiente tenor:

“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no



fueren contrarias a estos últimos.”

Surge de esta norma que el Estado se comporta como empleador y ello es así y, en tal sentido, la forma como se manejan las relaciones entre el sector público y el privado no difieren sino en los estatutos que son aplicables a uno y otro. En lo básico, las relaciones son similares. Sin embargo, existen materias que no están reguladas en el ámbito público y sí en el ámbito del Derecho Laboral, en particular en el Código del ramo dictado, en general, para regir las relaciones entre particulares. Una de tales cuestiones es la que dice relación con el Procedimiento de Tutela Laboral, de los artículos 485 y siguientes del Código Laboral, por lo que, necesariamente, dicha materia debe aplicarse a los trabajadores del sector público, cuando son objeto de actos de maltrato de sus derechos fundamentales, que no pueden ser corregidos sino por el órgano jurisdiccional.

Es por ello que la cuestión ha sido atinadamente decidida en el presente caso, por la sentencia del grado, la que en su motivo Sexto ha expresado lo que sigue:

“**SEXTO:** Respecto de la excepción de incompetencia absoluta. La demandada ha sustentado la incompetencia absoluta de este tribunal para conocer de esta controversia, en que siendo el actor un funcionario de planta de la Municipalidad demandada, resulta aplicable el estatuto contenido en la Ley N°18.883, que excluye la aplicación de las normas del Código del Trabajo, entre las que se contienen aquellas que regulan el procedimiento especial de tutela aquí impetrado, agregando que la competencia para conocer en definitiva de la legalidad de un acto de la administración corresponde a la Contraloría General de la República.

“Sobre tal cuestión existe jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema en cuanto a negar tal incompatibilidad, lo anterior dado que el Estado, a través de las diversas entidades públicas, entre ellas las Municipalidades oficia igualmente como empleador y, en tal calidad debe propiciar la debida protección de las garantías y derechos fundamentales de las personas. En tal sentido, el procedimiento especial de tutela regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, no tiene por objeto



obviar, o modificar el estatuto laboral que rige a los funcionarios, sino que viene a proteger un aspecto específico de los derechos de los mismos, cual es la defensa de los derechos fundamentales del servidor público en su ámbito laboral, de modo que su aplicación no permite sostener que la invocación de dichas normativas importe a su vez una infracción al Estatuto propio que rige a los funcionarios que prestan servicios en las Municipalidades. De hecho, sostener lo contrario, y consecuentemente declarar la incompetencia del tribunal importaría en la práctica generar una desigualdad de armas para los funcionarios públicos, quienes no podrían por la vía de este procedimiento cautelar, requerir la protección judicial debida ante la eventual vulneración de sus garantías fundamentales, con ocasión del ejercicio de su función, cuestión que se garantiza a todas las personas por la Constitución Política de la República. Por lo demás así lo ha sostenido la Excma. Corte suprema en la causa rol N°10.972-2013. En autos, la acción propuesta importa la revisión de mérito de una decisión de la autoridad, que produjo consecuencia en relación a la vinculación de dependencia laboral existente entre las partes, a la que se le atribuye el mérito de haber vulnerado garantías fundamentales del trabajador, en consecuencia, el análisis que se solicita efectuar al tribunal no es uno formal respecto de la legalidad del acto en su génesis, elaboración y ejecución, cuestión que indudablemente cae en el esfera de competencia de la Contraloría General de la República, como lo ha sostenido la demandada, sino, a determinar si dicho acto importó un actuar vulneratorio de garantías respecto del actor, cuestión que sólo se puede establecer a través de este procedimiento tutelar, que como ya se concluyó resulta plenamente aplicable en la especie, no siendo el motivo principal de lo pedido la invalidación del Decreto que declaró la vacancia del cargo del demandante, sino si el empleador Municipalidad obró con infracción de garantías fundamentales al ejercer la facultad de despido del actor.

“De tal modo, descartada la incompatibilidad normativa de aplicar en la especie el procedimiento de tutela regulado en los artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, habrá de rechazarse la excepción de incompetencia absoluta opuesta, debiendo avocarse en consecuencia esta



magistrado a conocer el fondo de la cuestión aquí propuesta.”

Con tal determinación esta Corte está de acuerdo, pudiéndose agregar que las cuestiones sobre vulneración de derechos fundamentales deben ser conocidas y resueltas, como es lógico, por un órgano jurisdiccional y no por entidades administrativas, sin perjuicio de las facultades de estos últimos, en particular si el Código del Trabajo trata esta delicada materia, más no la normativa administrativa.

En consecuencia, sin que pueda agregarse mucho más a lo dicho, pues parece de tan elemental entendimiento, que costaría encontrar argumentos valederos para sostener una postura contraria. Por lo demás, dicha postura iría en contradicción con la circunstancia de haberse tramitado, con diversa suerte, cientos de juicios similares, ante los juzgados del trabajo de nuestro país.

**15º)** Que, en relación con el segundo motivo de nulidad, se trata del que establece el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, ya transcrito, relativo a la transgresión manifiesta de las reglas sobre apreciación de la prueba, conocidas como sana crítica.

Como reiteradamente se ha señalado en otros recursos del mismo tipo, para que se presente este motivo de nulidad, es necesario que concurren dos requisitos que son esenciales o básicos. En primer término, la ley requiere que se trate de una infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica, producida en el ejercicio de la tarea de apreciar las evidencias. Esto significa que el vicio debe ser ostensible, notorio, visible, que debe desprenderse de la simple lectura del fallo, lo que en el presente caso no ocurre, puesto que el que se impugna no adolece de esa falencia, en la forma dicha, ya que ella no se aprecia en parte alguna del mismo.

**16º)** Que, luego, la parte que recurre por el motivo que se revisa debe señalar en forma clara y precisa, cual o cuales de los principios de la sana crítica se ha visto alterado, esto es, si han sido las razones jurídicas, las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, cuestión que en el presente caso ocurre, porque el recurrente precisa que en la especie se ha vulnerado el principio de razón suficiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente afirma que el fallo no se



apega a las reglas de la sana crítica, en particular al principio referido, pero sin lograr explicar la forma como éste se ha visto alterado y, por lo mismo, no demuestra la transgresión denunciada.

Cabe añadir que el recurso, a propósito de la segunda causal esgrimida, argumenta en torno a la inversión de la carga de la prueba y a la circunstancia de que no existen elementos probatorios que permitan sostener que el demandante se encontraba en idéntica situación jurídica que otros funcionarios, elemento que sería básico para determinar la existencia de discriminación. Estima, entonces, que el hecho de que no haya otros funcionarios en la misma situación, elimina la discriminación.

Ello es errado, pues el recurrente confunde este instituto jurídico con el principio de igualdad ante la ley, y es el propio fallo el que aclara el punto, cuando en el motivo Duodécimo expresa que “En tal sentido, la discriminación denunciada y constatada, no viene dada solo en cuanto la autoridad haya adoptado la decisión respecto del actor y no respecto de otras personas que estaban en situaciones similares en cuanto a tiempo que se encontraban haciendo uso de licencia médica, sino que debe igualmente considerarse que en la decisión adoptada, no se atendieron criterios mínimos de prudencia para evitar los efectos dañosos para el trabajador, que debe llevar aparejado el ejercicio de dicha facultad excepcionalísima en nuestro sistema jurídico.”

En efecto, parece muy carente de sensibilidad poner término a las funciones de una persona precisamente cuando se ha enfermado, pues al enorme daño que causa la enfermedad, sea cual sea, ha de entenderse grave si dura más de seis meses, se le suma el hecho de que al ser privado de su fuente de ingresos, no solo no podrá atender a sus necesidades personales y/o de la familia que de él pudiere depender, sino que ni siquiera podrá costear el tratamiento que necesariamente debe enfrentar para recuperarse o mitigar los efectos de la dolencia que presenta.

A juicio de esta Corte, el despido de un funcionario enfermo, por el hecho de la enfermedad, es la máxima vulneración de derechos en que puede incurrir un empleador, sea el Estado o un particular, especialmente si se tiene en cuenta que, si goza de licencia médica, es la entidad de salud



pertinente la que se hace cargo de las remuneraciones, y no el empleador.

Como sea, el hecho es que el segundo motivo de anulación se encuentra mal fundado, pues se centra, como se dijo, en la inversión de la carga de la prueba, el recurrente analiza pruebas, cuestión que no puede hacer ya que este tipo de recursos no lo permite, y discute la circunstancia, que no tiene mucha importancia, de que no habría otros funcionarios en la misma situación.

Adicionalmente, el recurso incursiona en argumentos que dicen relación con otras causales, como la acusación de carencia de prueba.

Sobre la base de lo dicho, el segundo motivo de nulidad entablado no concurre en el presente caso.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 474, 477, 478, 479, 480 y 481 del Código del Trabajo, se declara que **se rechaza con costas** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Pablo Paredes Bravo, por la demandada, contra la sentencia pronunciada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago con fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve.

Se fijan las costas que debe satisfacer la demandada, la Municipalidad de Ñuñoa, en la suma de un millón de pesos (\$1.000.000).

Regístrese y comuníquese al tribunal de origen.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°2754-2019.







WRRFKZJLXS

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Mario Rojas G., Juan Antonio Poblete M. Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a diecinueve de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

